RESEÑA

El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025

Hacer frente a la inflación alta de los precios de los alimentos en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición[1]

Adolfo Gpe. Álvarez Macías[2]

En esta reseña se analiza el informe *El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025* (SOFI 2025), que año con año coeditan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF). El subtítulo es por demás sugerente: *Hacer frente a la inflación alta de los precios de los alimentos en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición*. Esto pone de relieve cómo los conflictos internacionales y los efectos del cambio climático han influido tanto en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para los diferentes países y, dentro de ellos, para los grupos socioeconómicos más desfavorecidos.

¿Puede un informe de política global orientar a un productor agrícola de ingresos bajos a entender por qué la caja de jitomate que vende le alcanza cada vez menos para comprar una canasta alimentaria diversificada? La respuesta, que sorprende, es afirmativa, ya que se trata de un texto analítico sobre cómo la inflación prolongada de los precios de los alimentos opera como una barrera macroeconómica que menoscaba sistemáticamente la capacidad de las personas –y de los campesinos, en específico– de más bajos ingresos para acceder a dietas balanceadas.

El informe se publica en una coyuntura histórica que no admite complacencia. La Agenda 2030 está a cinco años de su horizonte y el ODS 2, que compromete a la comunidad internacional con el Hambre Cero, acusa un rezago estructural preocupante. El informe marca con precisión los dos objetivos primarios de la Agenda: la meta 2.1, que busca garantizar el acceso permanente de todas las personas a alimentos sanos, nutritivos y suficientes; y la meta 2.2, que exige eliminar toda forma de malnutrición. Para ambas metas, el diagnóstico de la edición 2025 es contundente y dramático: el mundo no avanza por la ruta correcta.

El eje central de esta edición es el análisis de cómo la inflación macroeconómica contrae el presupuesto de los

[1] FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2025). https://doi.org/10.4060/cd6008es

[2] Profesor-investigador, Departamento de Producción Agrícola y Animal. Universidad Autónoma Metropolita. Unidad Xochimilco. Correo electrónico:aalvarez@correo.xoc.uam.mx

Fecha de recepción: 29 de septiembre de 2025—Fecha de aceptación: 3 de abril de 2026

hogares vulnerables y convierte el acceso a una dieta saludable en un privilegio, no en un derecho. Desde esa perspectiva, se ofrece una guía de política económica concreta para que los Estados transiten de medidas de emergencia –reactivas y frecuentemente distorsionantes– hacia inversiones estructurales de largo plazo. La fortaleza analítica de este *Informe 2025* reside en la combinación de indicadores macroestadísticos de disponibilidad de alimentos con escalas de percepción directa a nivel de hogar, lo que permite capturar simultáneamente dos dimensiones que a menudo se confunden: cuántos alimentos están disponibles en un país y cuántas personas pueden adquirirlos.

En cuanto a la prevalencia de la subalimentación, es un indicador macroeconómico y demográfico. Mide la probabilidad estadística de que una persona seleccionada al azar dentro de una población consuma de manera habitual menos energía alimentaria de la que necesita para mantener un estado de salud y actividad básico. Para su estimación, el modelo integra la disponibilidad nacional de alimentos –derivada de las Hojas de Balance de la FAO– con parámetros de distribución del consumo calórico construidos a partir de encuestas de ingresos y gastos de los hogares. El resultado es un indicador que sintetiza en un solo número la desigualdad interna en el acceso a los alimentos. Cabe resaltar que este indicador mide la condición estructural de escasez crónica de energía en una población. La distinción crítica se entiende al comparar dos países con la misma disponibilidad per cápita de alimentos pero que pueden tener prevalencias de subalimentación radicalmente distintas si uno favorece ese acceso de forma más igualitaria que el otro.

En cuanto a la escala de experiencias de inseguridad alimentaria (FIES), se trata de una medición directa que capta la severidad de las restricciones de acceso a los alimentos desde la percepción de las propias personas afectadas. A través de un cuestionario, la FIES clasifica a la población en tres niveles operativos: seguridad alimentaria o inseguridad leve; inseguridad alimentaria moderada –cuando las personas reducen la calidad o variedad de su dieta o enfrentan incertidumbre sobre su disponibilidad– e inseguridad alimentaria grave, cuando las personas se quedan sin alimentos, experimentan hambre manifiesta y pasan días sin ingerir calorías suficientes.

La combinación de ambos indicadores anteriores resulta fundamental con respecto a la experiencia vivida. Un sistema agroalimentario puede producir suficientes calorías para alimentar a su población y, al mismo tiempo, tener millones de hogares que reportan inseguridad alimentaria grave porque no tienen el ingreso suficiente para comprar esos alimentos.

Los datos procesados hasta 2024 contenidos en este informe muestran una dinámica de estabilización precaria y profundamente asimétrica tras el colapso sistémico observado en el trienio 2019-2021. A escala global, la prevalencia de la subalimentación registró ligeras reducciones marginales, lo que confirma que las iniciativas de recuperación económica tuvieron impactos positivos en regiones de ingresos medios. Sin embargo, las cifras absolutas siguen siendo inaceptables: cientos de millones de personas continúan padeciendo hambre crónica, situando al mundo en una trayectoria de incumplimiento del mandato de Hambre Cero para 2030. Los promedios globales ocultan divergencias geográficas que reflejan las profundas asimetrías fiscales y estructurales entre continentes, como se aprecia a continuación.

- **América Latina y el Caribe:** Representa el caso de éxito más sobresaliente del Informe. La consolidación de redes de protección social, transferencias monetarias condicionadas y una estabilización macroeconómica relativamente rápida después de la pandemia permitieron una reducción significa-

tiva en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, atribuida fundamentalmente a mejoras en América del Sur. Este avance no fue espontáneo sino el resultado de decisiones deliberadas de política pública sostenidas en el tiempo.

- **África:** Se consolida como la región con la crisis alimentaria estructural más aguda en el mundo. El hambre siguió incrementándose de manera persistente en la mayoría de sus subregiones, impulsada por conflictos internos devastadores –particularmente en Sudán y la República Democrática del Congo– y por choques climáticos extremos. Para 2024, aproximadamente dos tercios de la población africana se encontraban en situación de inaccesibilidad total de dietas saludables, más del doble del promedio global. El número de personas en esa vulnerabilidad extrema rebasó 71 millones entre 2022 y 2024, una cifra que supera la población de varios países de la región.
- **Asia:** Muestra un comportamiento dual. Asia meridional y sudoriental documentaron avances consistentes en el acceso alimentario, especialmente en sus nodos urbanos, gracias al dinamismo comercial y a programas de subsidios debidamente diseñados. En contraste, Asia occidental sufrió deterioros notables atribuibles a tensiones geopolíticas, la decadencia de infraestructura agrícola local y la inflación galopante en mercados domésticos.

En lo que respecta al análisis territorial se muestra que la reducción de la inseguridad alimentaria se concentró en las áreas urbanas globales, mientras que las poblaciones rurales y periurbanas permanecieron estancadas. Esto evidencia el aislamiento de los pequeños productores agrícolas frente a los flujos formales de distribución y su alta vulnerabilidad ante pérdidas de cosechas e incrementos en los costos de insumos. En términos prácticos, hay una paradoja recurrente: la persona que produce alimentos es frecuentemente quien tiene menor acceso a una dieta diversificada. En materia de género, la brecha en la seguridad alimentaria reportó un aumento en 2024, con una prevalencia de inseguridad alimentaria sistemáticamente más alta entre las mujeres adultas que entre los hombres en todas las regiones evaluadas. Esto no es un accidente, más bien refleja asimetrías estructurales de ingresos, falta de acceso a la propiedad de la tierra y desprotección en el mercado laboral informal.

Una de las aportaciones más trascendentales del Informe reside en la actualización del costo y del índice de accesibilidad a las dietas saludables a nivel global. La noción contemporánea de seguridad alimentaria va mucho más allá de la provisión calórica mínima –granos básicos que llenen el estómago– y exige acceso económico diario a una combinación equilibrada de seis grupos de alimentos: básicos amiláceos, vegetales ricos en proteínas como leguminosas y frutos secos, productos lácteos, carnes, pescados y huevos, hortalizas y frutas. Los análisis confirman que el costo medio de esa dieta saludable escaló en paralelo a la inflación macroeconómica global. Aunque la proporción porcentual de personas incapaces de costearla mostró un ligero descenso entre 2020 y 2024 debido a la recuperación de ingresos nominales en algunas regiones, la cifra absoluta continúa siendo inadmisible: miles de millones de personas carecen de la liquidez financiera mínima para conseguir alimentos con alta densidad de nutrientes. Cuando el análisis excluye mercados gigantescos como la India –que implementó programas masivos de subsidios alimentarios directos–, la tendencia en el agregado de los países de ingresos medianos bajos es ascendente en cuanto al volumen de personas marginadas del acceso a dietas saludables. En el siguiente cuadro se propone un resumen a este respecto.

Tendencia de países de ingresos medios bajos con personas sin acceso a dietas saludables

Región Geográfica	Prevalencia de Inaccesibilidad (2024)	Dinámica Absoluta	Factores Asociados
África	~66.6% (dos tercios de la población)	+71.2 M personas que en 2022 (total: 1,008.9 M)	Conflictos armados, depreciación cambiaria, sequías
Asia	< 28.1% (ligeramente menor al promedio mundial)	Reducción neta por subsidios en India	Mejora urbana compensada por retrocesos en Asia occidental
América Latina y el Caribe	~27.4% (por debajo del promedio global)	Estabilización neta con caídas en Sudamérica	Expansión de transferencias monetarias y protección social
Oceanía	19.6% de la población total	Incrementos leves en microestados insulares	Altos costos logísticos de transporte e importación
América Septentrional	5.0% de la población total	Estable; afecta a deciles de pobreza extrema	Inflación urbana compensada por salarios nominales altos

Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2025.

El Informe también examina el progreso global en relación con los siete indicadores de nutrición vinculados a las metas mundiales de salud pública. El diagnóstico es claro en su formulación: la mayoría de los países no cuenta con información estadística suficiente o, peor aún, se encuentra completamente fuera de la trayectoria necesaria para alcanzar los compromisos fijados para 2030. La ausencia de datos traduce la opacidad que oculta frecuentemente los peores resultados.

El comportamiento de los indicadores antropométricos en la primera infancia muestra resultados diversos pero insuficientes en velocidad de cambio.

- **Retraso del crecimiento (*stunting*):** Refleja fallas persistentes en salud, saneamiento y alimentación materna. La tasa global mantiene una tendencia descendente, pero la velocidad de reducción es excesivamente lenta para alcanzar las metas internacionales, lo que condena a millones de infantes a mermas irreversibles en su desarrollo cognitivo y metabólico.

- **Emaciación infantil (*wasting*):** Condición de desnutrición aguda severa que pone en riesgo inmediato la supervivencia del menor. De los países con bases de datos actualizadas, aproximadamente el 56% avanza de forma satisfactoria en la trayectoria de reducción. Sin embargo, la brecha de monitoreo es crítica, 63 de 195 países carecen de encuestas antropométricas periódicas, un vacío que dificulta la intervención humanitaria urgente.

- **Bajo peso al nacer:** Destaca el parámetro nutricional infantil con el menor porcentaje de países en trayectoria de cumplimiento. Revela las deficiencias calóricas y de micronutrientes crónicas sufridas por mujeres gestantes, directamente vinculadas a la anemia y a la inaccesibilidad de alimentos frescos de calidad.

Apenas un tercio de los niños de entre 6 y 23 meses en todo el mundo alcanza el umbral de la diversidad alimentaria mínima. Por ende, dos de cada tres niños en la fase crítica de ablactación[3] son alimentados de forma monótona, dependiente de carbohidratos simples y carente de los micronutrientes esenciales para el desarrollo neurológico. En contraste, aproximadamente dos tercios de las mujeres en edad reproductiva logran cubrir ese requerimiento a escala global, aunque la cifra se reduce drásticamente al desagregar los datos en zonas rurales de bajos ingresos.

En contraste, la malnutrición por exceso –sobrepeso infantil y obesidad en adultos– se consolida como una epidemia que coexiste de forma paradójica con el hambre crónica. Este fenómeno de doble carga nutricional no es una contradicción; ante incrementos pronunciados en los precios de los alimentos frescos, las familias vulnerables responden de manera racionalmente comprensible, sacrificando la densidad nutricional y migran hacia el consumo de calorías baratas, densas en energía, sodio y azúcares simples, típicas de los alimentos ultraprocesados.

El núcleo analítico de este Informe es la deconstrucción macroeconómica de la tormenta que propulsó la inflación de los precios de los alimentos entre finales de 2020 y su cénit en enero de 2023. La escalada inflacionaria no respondió a un solo factor aislado, sino a un acoplamiento sistémico de perturbaciones globales y locales que se reforzaron mutuamente, destacando las siguientes:

- **Perturbaciones de costos en productos básicos e insumos:** La reactivación asimétrica tras la COVID-19 generó cuellos de botella masivos en las redes logísticas mundiales, disparando los costos de fletes marítimos. El conflicto entre Rusia y Ucrania –dos de los productores más relevantes de cereales (trigo, maíz) y fertilizantes nitrogenados y potásicos– operó como un choque de oferta que elevó de forma inmediata el costo marginal de producción agrícola en todo el mundo.

- **Asimetrías cambiarias y política monetaria:** La respuesta de la Reserva Federal de los Estados Unidos ante la inflación interna implicó incrementos en tasas de interés, lo que indujo una apreciación generalizada del dólar. Dado que los bienes agroalimentarios básicos y la energía se cotizan internacionalmente en dólares, las naciones en desarrollo sufrieron una inflación importada de doble vía: compraban más caro en dólares y convertían esos precios a monedas locales que se depreciaban simultáneamente. Cuando los precios internacionales de los granos comenzaron a descender a finales de 2023, las monedas locales debilitadas impidieron que ese alivio llegara a los consumidores domésticos.

- **Elasticidad de transmisión asimétrica:** Los análisis econométricos del informe demuestran que las fluctuaciones de precios internacionales tuvieron un traspaso significativamente superior e inmediato

[3] Proceso mediante el cual se introducen progresivamente alimentos sólidos o líquidos diferentes a la leche materna o de fórmula en la dieta del bebé, preparándolo para la dieta familia.

en países importadores netos y en economías con estructuras de mercado interno altamente concentradas u oligopólicas. Es decir, los beneficios de los precios bajos no llegaron rápido, pero los incrementos sí.

Un hallazgo de primer orden es que la inflación afectó de manera heterogénea a las distintas categorías de alimentos. Los básicos amiláceos –arroz, maíz, trigo, tubérculos– han mantenido históricamente un costo inferior al de los grupos ricos en micronutrientes: hortalizas frescas, frutas y proteínas de origen animal. Durante el choque inflacionario, los alimentos de alta densidad nutricional registraron incrementos de precio relativos más pronunciados y volátiles que los carbohidratos básicos. Lo anterior consolida una paradoja de mercado que tiene consecuencias graves para la política de salud pública: los alimentos ultraprocesados resultaron ser significativamente más asequibles y estables ante los choques inflacionarios que sus alternativas frescas. Las corporaciones agroindustriales multinacionales poseen economías de escala masivas, contratos de cobertura financiera a largo plazo y cadenas de suministro diversificadas que les permiten absorber choques temporales de costos y mantener precios relativamente bajos en productos de larga vida de anaquel. El consumidor de bajos ingresos, atrapado en la contracción de su salario real, responde de forma racionalmente comprensible desde la óptica de la supervivencia económica: maximiza la compra de calorías baratas por unidad monetaria, sacrificando inevitablemente su salud metabólica. Casos como México, Nigeria y Pakistán documentados en el informe muestran que este patrón de sustitución no es marginal, más bien ha resultado masivo y sistemático.

El Informe procedió a una auditoría sin precedentes sobre la efectividad real de las políticas públicas fiscales, monetarias y comerciales instrumentadas por los gobiernos para enfrentar la crisis inflacionaria. El análisis cubre más de 10,000 registros normativos en 153 países soberanos. La conclusión central es categórica: ante choques de precios idénticos en el mercado internacional, los países obtuvieron trayectorias de seguridad alimentaria radicalmente divergentes en función de la calidad, la coordinación y la oportunidad de sus respuestas internas.

El Informe clasifica las herramientas gubernamentales en función de su eficiencia económica y su impacto social de largo plazo:

- **Subsidios generalizados y controles de precios de emergencia:** Los países con inseguridad alimentaria de base media-alta recurrieron preferentemente a la imposición de controles de precios obligatorios y a subsidios generalizados a la producción. Si bien estas intervenciones proporcionaron un alivio inmediato, su mantenimiento prolongado desincentivo la oferta de los productores locales, fomentaron mercados negros y drenaron el espacio fiscal de los gobiernos precisamente cuando se necesitaba inversión en infraestructura pública.

- **Estrategias comerciales reactivas descoordinadas:** Se detectó un patrón adverso en naciones de ingresos medianos bajos donde la liberalización abrupta de aranceles de importación coincidió con deterioros profundos en la seguridad alimentaria a largo plazo. Estas medidas desestabilizaron los precios al productor local sin garantizar una reducción real y permanente de precios para el consumidor final, evidenciando fallas de transmisión en cadenas de intermediación oligopólicas.

- **Políticas de comercio estable y competencia activa:** En contraste, las naciones que lograron mantener o mejorar sus indicadores de seguridad alimentaria combinaron acuerdos de libre comercio estables, exenciones arancelarias previsibles y una fiscalización estricta de las políticas de competencia de mercado para evitar especulación y colusión en los márgenes de la distribución alimentaria. La transparencia resultó ser tanto o más efectiva que los subsidios.

Un factor diferenciador crítico en esta crisis, comparada con la desastrosa crisis de precios agrícolas de 2007-2008, fue el. Plataformas globales como el Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola (AMIS, por sus siglas en inglés) permitieron una monitorización en tiempo real de las existencias de cereales, desactivando olas especulativas y evitando que los países aplicaran prohibiciones generalizadas de exportación que habrían estrangulado el comercio mundial.

A nivel nacional, el informe destaca innovaciones tecnológicas como la plataforma del Mercado Agrícola Nacional de la India (eNAM), que conectó digitalmente a los pequeños productores con compradores mayoristas nacionales en plena crisis, estabilizando precios y garantizando el flujo del suministro. El acceso masivo a internet y a la telefonía móvil facilitó la dispersión artificial de precios y optimizar el arbitraje de mercado en beneficio directo de las comunidades rurales más vulnerables. Al parecer la conectividad digital funciona como un bien público rural prioritario.

El Informe concluye con un mensaje de urgencia y pragmatismo económico simultáneos: erradicar el hambre y la malnutrición para 2030 exige abandonar definitivamente las intervenciones paliativas de emergencia y transitar hacia una reingeniería sistémica de las políticas agroalimentarias globales. No basta con expandir el volumen bruto de producción de alimentos. El imperativo ético y económico se orienta a transformar las cadenas de valor para garantizar la accesibilidad a dietas saludables con alta densidad nutricional para toda la humanidad. Para ello, en el Informe se propone cuatro ejes de acción vinculantes:

- **Sostenibilidad e inversión en resiliencia agrícola:** Los gobiernos deben reorientar presupuestos públicos hacia bienes públicos rurales esenciales: investigación y desarrollo para la adaptación climática, tecnificación del riego, infraestructura crítica de almacenamiento en frío para reducir pérdidas poscosecha y redes de transporte rural que conecten eficientemente a los pequeños productores con centros de consumo urbano.

- **Focalización rigurosa de la protección social:** Las transferencias monetarias y los subsidios alimentarios deben focalizarse en los hogares en pobreza extrema, mujeres gestantes y poblaciones en la primera infancia. Los subsidios generalizados suelen ser regresivos, fiscalmente insostenibles y diluyen el impacto social necesario para romper el ciclo intergeneracional de la desnutrición.

- **Gobernanza comercial y regulación de competencia:** Es imperativo consolidar un sistema de comercio internacional abierto y previsible, sin restricciones unilaterales de exportación sobre bienes alimentarios y fertilizantes clave. En paralelo, las agencias regulatorias nacionales deben intervenir en los mercados agroalimentarios para fiscalizar y desarticular prácticas oligopólicas que inflan artificialmente los precios al consumidor final.

- **Políticas fiscales nutricionales y entornos alimentarios saludables:** Los Estados deben implementar marcos impositivos de salud pública, aplicando impuestos selectivos a alimentos ultraprocesados y de baja densidad de nutrientes, canalizando esa recaudación hacia el subsidio y distribución prioritaria de alimentos frescos, verduras y leguminosas en escuelas y redes de protección social.